

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandantes : **ALBA DORIELA MONTOYA DE CHAVARRIAGA y JOSÉ ULISES CHAVARRIAGA CEBALLOS**
Demandada : **COLFONDOS S.A.**
Radicado : **05001 31 05 014 2017 00920 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – Pensión de Sobrevivientes causada por muerte de hijo.
Decisión : Modifica decisión condenatoria
Sentencia No : 010

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**,¹ profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en la **Ley 2213 del 13 de junio de 2022**², que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

¹ conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente.

² “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”

Solicitan se condene a COLFONDOS S.A. al reconocimiento y pago de la **pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo** Juan David Chavarriaga Montoya, desde el 1° de julio de 2017, intereses moratorios, indexación, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el hijo de los demandantes Juan David Chavarriaga Montoya falleció **el 1° de julio de 2017**; era soltero, sin descendientes, vivía con sus padres y colaboraba con los gastos del núcleo familiar; COLFONDOS S.A., les negó la pensión de sobrevivientes aduciendo no ser beneficiarios de la misma; el causante laboraba como Auxiliar Administrativo en la IPS Universitaria León 13, devengando un salario variable de \$1.250.000; los gastos del hogar eran repartidos por mitades entre padre e hijo, asumiendo este último los servicios públicos, impuesto predial, alimentación, pago de letra de cambio, préstamo para mejoras de la casa y gastos médicos de su madre; después de la muerte del causante, los demandantes se vieron enormemente perjudicados al asumir toda la carga económica.

Respuesta de la Parte Demandada:

COLFONDOS S.A., a través de apoderada judicial, aduce que de acuerdo con la investigación administrativa efectuada por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., el aporte que daba el causante no era para los gastos del hogar sino por vivir bajo el mismo techo con sus padres; el encargado de los gastos era el señor José Ulises Chavarriaga Ceballos, de manera que era posible la subsistencia de los demandantes sin el aporte del

causante y sin vulnerarse su mínimo vital. Se opuso a las pretensiones y formuló en su defensa las excepciones que denominó la subsistencia económica de los demandantes no dependía del afiliado fallecido, inexistencia de la obligación, cumplimiento del artículo 294 del Código Sustantivo del Trabajo, inexistencia de beneficiarios, cobro de lo no debido, buena fe, pago y compensación, prescripción, genérica.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín**, declaró que **los demandantes acreditaron el derecho** al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; condenó a COLFONDOS S.A. a reconocerles y pagarles dicha prestación en proporción del 50% para cada uno a partir del 1° de julio de 2017, causándose un retroactivo hasta el 31 de agosto 2021 por la suma de \$44.765.320, dividido en partes iguales; estableció la mesada pensional a partir del 1° de septiembre de 2021 equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021, teniendo en cuenta la mesada adicional de diciembre, sin perjuicio de los incrementos anuales y legales; condenó a los intereses moratorios en favor de los demandantes respecto del valor de cada mesada pensional causada a partir del 25 de octubre de 2017 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago; autorizó a descontar del retroactivo las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud; absolvió de la indexación; impuso costas a cargo de COLFONDOS S.A. fijando como agencias en derecho la suma de \$3.500.000.

Lo anterior, considerando, en términos generales, que la pensión devengada por el demandante José Ulises Chavarriaga Ceballos es un poco superior al mínimo legal y si se tiene en

cuenta los descuentos por salud, escasamente le da para cubrir los gastos de alimentación; la demandante no trabaja y aunque tienen vivienda, esto no los hace por si mismos autosuficientes del causante quien como mínimo, dedicaba el 50% de su salarios a la manutención de sus padres en condiciones dignas; **el aporte del causante era cierto –no presunto-, regular y periódico**, incluso ayudando a asumir el pago del préstamo bancario que había hecho su padre para reparaciones de vivienda.

Recurso de Apelación apoderada COLFONDOS S.A.:

Solicita se revoque la sentencia, por cuanto los demandantes no demostraron la dependencia económica de su hijo fallecido; la demandante confiesa que vivían en casa propia desde hace 25 años aproximadamente; que su esposo ha velado por el sostenimiento del hogar estando pensionado ocho años atrás, devengando una mesada superior al \$1.100.000; que el causante tenía gastos personales por concepto de celular, préstamos, moto, vestuario, cuotas de almacenes y diversión; que el salario que devengaba su hijo era de \$1.100.000 dando un aporte para el hogar de \$350.000; que no la tenía afiliada como beneficiaria en salud porque siempre lo ha sido de su esposo; que desde la muerte de Juan David ha dejado de visitar a su madre a quien veía constantemente, cohibiéndose de muchas cosas, pero no indica qué cosas. El demandante José Ulises por su parte, manifiesta que siempre ha tenido ingresos superiores al salario mínimo, velando por el sostenimiento de su esposa y del hogar; que los gastos generales eran de \$800.000 respecto de los cuales, su hijo aportaba \$350.000. De la investigación administrativa es posible establecer la no dependencia económica, al evidenciar que el señor José Ulises siempre ha sido el encargado de los gastos del hogar quien tenía para el año 2017 una mesada pensional de \$1.223.888, superior al salario mínimo; la demandante manifestó

recibir ayuda de uno de sus hijos y que solicitaron la pensión de sobrevivientes, no para la subsistencia, sino porque no les alcanza para cubrir los préstamos que tiene el demandante a su nombre; la ayuda de Juan David, era la de un buen hijo de familia, destinada para su propio beneficio ya que vivía en el mismo hogar con sus padres; el señor José Ulises, dice en el interrogatorio que el aporte de su hijo era para el lavado de su ropa, alimentación, internet, pues era él quien utilizaba esos servicios; no se puede tener en cuenta prueba documental como cuentas de servicios, ingresos, facturas del supuesto mercado, por cuanto son posteriores a la fecha del fallecimiento del causante. **Solicita revocar la condena de intereses moratorios** porque aplican únicamente en los casos de mora en el pago de las mesadas pensionales, debatiéndose en este caso, un derecho que no ha nacido a la vida jurídica; la pensión no se negó de forma caprichosa ya había suficientes pruebas para ello, sin darse así los presupuestos para que se condene por este concepto, más si se tiene en cuenta la Sentencia de la Sala de Casación Laboral con radicado 787000 de 2013, según la cual, cuando los fondos de pensiones están amparados por la normatividad para negar la pensión de sobrevivientes, no hay lugar a imponer estos intereses.

Alegatos de conclusión:

La apoderada de COLFONDOS S.A. reitera argumentos expuestos en Primera Instancia.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en verificar si los demandantes Alba Doriela Montoya de Chavarriaga y José Ulises Chavarriaga Ceballos, acreditan el requisito de la dependencia económica, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su hijo Juan David Chavarriaga Montoya; de ser procedente el reconocimiento de esta prestación, se examinará si hay lugar a condenar a COLFONDOS S.A. a intereses moratorios.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, modificar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:

Está acreditado que el causante Juan David Chavarriaga Montoya falleció el 1° de julio de 2017, como se desprende del registro civil de defunción (folio 14 archivo 01), de manera que **la normatividad aplicable es la establecida en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,** el cual establece que, **a falta de**

cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste, veamos:

“...ART. 74.—Modificado. L. 797/2003, art. 13. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente ~~de forma total y absoluta~~ de éste...”.

En lo relativo a la dependencia económica, la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006, declaró inexecutable la expresión “de forma total y absoluta” contenida en el literal d) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, precisando una serie de criterios que permiten determinar si una persona es o no dependiente de otra, a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, esto es, una serie de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular; explicando que no es determinante para concluir que hay independencia económica: devengar el SMLMV, una asignación mensual o un ingreso adicional, **ni recibir otra pensión, ni los ingresos ocasionales, ni poseer un predio; veamos:**

“...Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.

2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.

3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.

4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.

5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.

6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica...” (Negritas fuera de texto).

Sobre la dependencia económica, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en **Sentencia SL102 de 2019 Radicado 70248**, reiterando su jurisprudencia indicó que **la dependencia económica** requerida por la Ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: **ser cierta y no presunta, regular y periódica** y las contribuciones deben ser **significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios**, de manera que se constituyan en un **verdadero soporte o sustento económico**.

En **Sentencias SL4025 de 2018 Radicado 70309, SL6558 de 2017 Radicado 48429, SL6390 de 2016 Radicado 48064**, indicó que sólo puede ser definida y establecida en cada caso concreto, **no descartando ingresos familiares adicionales a los del afiliado fallecido**; advirtiendo que aunque **no se exige una dependencia total y absoluta, no cualquier ayuda suministrada a los familiares puede ser prueba determinante para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes**, ya que **el propósito del Sistema de Seguridad Social, es amparar a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba en forma real a mantener unas condiciones de vida determinadas**; explicando que debe existir un grado de dependencia, identificado a partir de la falta de autosuficiencia económica y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos que aportaba la persona fallecida.

Así mismo, en **Sentencias SL156 de 2019 Radicado 68250 y SL2845 de 2018 Radicado 62289**, reiterando su jurisprudencia, precisó que **no es dable desvirtuar la dependencia económica de los padres del afiliado fallecido por razón de contar con otros ingresos**. Igualmente, en **Sentencia SL9196 de 2017 Radicado 52233**, precisó que **la dependencia**

económica no puede tener la connotación de exigir a los progenitores un estado de pobreza absoluta o indigencia, pues lo cierto es que así tengan un ingreso o patrimonio propio, si no son autosuficientes y dependen de la ayuda económica del hijo, podrán acceder a la pensión de sobrevivientes.

En el asunto analizado, nos encontramos con que:

En cuanto a la dependencia económica de la demandante Alba Doriela Montoya de Chavarriaga, al rendir interrogatorio de parte, refiere que reside en vivienda propia ; **siempre ha sido ama de casa**; dependía de su esposo, hasta que su hijo Juan David empezó a trabajar devengando un salario - según le parece- de \$1.100.000, **con el cual aportaba \$350.000 para el mercado, \$90.000 para los servicios públicos y un pequeño aporte para las deudas de los préstamos**; el mercado costaba por ahí \$500.000, fuera de gastos extras como leche o carne; aparte de la pensión de su esposo, no tienen otros ingresos de manera que después de que su hijo muriera se han tenido que cohibir de muchas cosas, medirse en los gastos, dejar de comprar muchos artículos de comida que si podían cuando él vivía y dejando de visitar a su mamá a quien veía mucho.

El señor José Ulises Chavarriaga Ceballos en el interrogatorio de parte, refiere que **es pensionado desde hace 8 años, cuyo monto, al momento del fallecimiento del causante, era \$800.00 más o menos**; sus ingresos siempre han estado \$100.000 por encima del mínimo, máximo \$200.000; vio por sus hijos económicamente mientras estudiaban; su esposa nunca laboró ni tuvo ingresos; cuando Juan David empezó a trabajar, - con un salario según tenía entendido de \$1.100.000-, se encargó de pagar el internet, parabólica y telefonía, ya que era quien más los consumía; no tenía deudas propias ya que los préstamos los sacaba a nombre de la mamá; **entre él y su hijo pagaban los**

gastos del hogar que en total eran aproximadamente de \$800.000 o \$900.000, aportando de su pensión más o menos \$500.000 mientras que el aporte de Juan David era de \$350.000 el cual se lo daba a su mamá para comida, lavada de ropa; aparte, daba \$90.000 para otros gastos; después de que su hijo falleciera, empezaron a pasar muchas necesidades al tener que abonar para las deudas.

Lo anterior es corroborado por los testimonios de María de los Ángeles Gaviria, Juan Carlos Arbeláez Zapata y Jhon Jairo Bajonero Amariles, cuyas declaraciones se observan espontáneas, objetivas e imparciales, quienes también manifiesta que la señora Alba Doriela no tiene ningún tipo ingresos, de manera que los gastos del hogar eran asumidos entre Juan David y el señor José Ulises.

La testigo María de los Ángeles Gaviria, con conocimiento de los hechos por relación de vecindad y afirmando ser muy allegada a la familia, manifiesta que los demandantes tienen otros dos hijos, pero están casados y con sus propias responsabilidades; la demandante sufre cáncer de tiroides desde antes de la muerte de su hijo, quien le colaboraba con el dinero de los taxis para ir a la clínica; **los gastos del hogar se repartían entre el causante y su padre quien es pensionado; Juan David aportaba por ahí el 70% para el mercado, servicios y la deuda que tenían de la casa**; el salario del causante era superior al millón de pesos; el mercado costaba más o menos \$500.000, lo cual sabe porque mercaba con ellos, mientras que el préstamo de la casa era de aproximadamente \$200.000; veía cuando le daba dinero a su madre, por ahí \$350.000 para los gastos de la casa y a su padre \$350.000 para pagar el préstamo de vivienda, por lo que les daba más o menos \$600.000, por eso sabía que el joven

ayudaba en la casa; actualmente viven de lo que gana el señor José Ulises Chavarriaga Ceballos.

El testigo Juan Carlos Arbeláez Zapata, quien está casado con la señora Marley Zeneida Chavarriaga –hermana del causante- afirma que los visitaba de tres a cuatro veces a la semana; no tiene conocimiento del valor exacto de las contribuciones económicas del causante pero sabe que ayudaba con la comida, servicios, gastos normales del hogar y para el pago de un préstamo para reformas que se le estaban haciendo a la casa; **los gastos del hogar eran compartidos entre Juan David y el señor José Ulises**; los aportes del causante incidían mucho, porque después de morir, el hogar de los demandantes presenta muchas falencias, ya que solo son propietarios de la casa en la que viven.

El testigo Jhon Jairo Bajonero Amariles, casado con una hermana de la demandante, afirma que el causante colaboraba con la comida, servicios, los gastos del taxi de su madre cuando tenía que ir al médico; se le hicieron unas reformas a la casa, más que todo porque Juan David dijo que lo hicieran, cuyos recursos se obtuvieron de un préstamo que todavía se está pagando; **los encargados de pagar los gastos del hogar eran Juan David y el papá**, lo cual sabe porque su esposa lo vio y se lo comentaba.

De las anteriores declaraciones, puede observarse que aparte de los gastos normales del hogar, se había adquirido una deuda para mejorar la vivienda, lo cual se constata con la liquidación del crédito del Banco Popular aportado con la demanda, donde se registra que el señor José Ulises adquirió un préstamo por valor de \$11.000.000, desembolsado el 11 de enero de 2017, a 60 meses, debiéndose pagar una cuota mensual de

\$282.703 (folios 42 a 44 archivo 01); **evidenciándose que las necesidades básicas del grupo familiar**, tales como alimentación, pago de servicios públicos, entre otros, **así como el pago de mencionado préstamo bancario, se solventaban entre el señor José Ulises**, quien es pensionado, **y Juan David**, cuyos aportes, tal como lo indicó el *a quo*, eran ciertos – no presuntos-, regular y periódicos.

Examinando la investigación adelantada por COLFONDOS S.A., a través de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., consistente en un cuestionario suscrito por la señora Alba Doriela Montoya de Chavarriaga (folios 198 a 222 archivo 01), se anota que el aporte de su hijo era mensualmente de \$800.000 para cubrir los gastos del hogar y préstamos para mejorar la casa; no tiene ingresos aparte de la pensión de su esposo; después del fallecimiento, los gastos con los que ayudaba el causante se han cubierto con la pensión y las ayuda parcial de un hijo; Juan David era el que los apoyaba económicamente y fue por él, que hicieron un préstamo para mejorar la casa, sin que la pensión del señor José Uliser alcance para sufragar los gastos del hogar como de los bancos. En el espacio de la entrevista destinado a la relación mensual de gastos cuando vivía el afiliado, los discriminan de la siguiente manera:

POR FAVOR RELACIONAR LOS GASTOS MENSUALES DEL GRUPO FAMILIAR PARA LA FECHA EN QUE VIVÍA EL AFILIADO:

• Arriendo:	\$		
• Servicio de Agua:	\$	26.779	
• Servicio de Luz:	\$	45.726	
• Servicio de Gas:	\$	36.464	
• Teléfono:	\$	32.924	
• Medicinas:	\$	20.000	
• Vestuarios:	\$	0.000.000	
• Total Mercado:	\$	600000	
• Préstamos:	\$	20'000.000	
• Transporte:	\$	20.000	
• Matrículas:	\$		
• Otros:	\$	Internet 38.400	Especificar: _____
TOTAL GASTOS	\$	22'879033	

Aunque el total de gastos mensuales consignado por la demandante en dicha encuesta es a todas luces desproporcionado de cara a la realidad económica del grupo familiar, nótese como lo relativo al mercado, servicios públicos o internet, guarda similitud con los valores que fueron señalados en los interrogatorios de parte y testimonios, los cuales eran sufragados exclusivamente por el causante y su padre.

Si bien la señora **Alba Doriela Montoya de Chavariaga** cuenta con el apoyo de su esposo José Ulises, lo cual constituye la obligación alimentaria que éste tiene frente a ella, debe tenerse en cuenta que cada mes contaba con **el aporte económico que el afiliado Juan David Chavarriaga Montoya daba para solventar gastos del hogar tales como el mercado o servicios públicos, lo cual no solo beneficiaba al causante, sino que era para todo el grupo familiar; siendo claro que por sí sola no tenía manera de satisfacer sus necesidades más básicas**, dependiendo exclusivamente, no solo de lo que su esposo le pudiese suministrar, sino de las ayudas de su hijo que fueron **constantes y en tal medida, determinantes para su sostenimiento económico; cumpliéndose los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes pretendida**, pues ante la ausencia de su hijo, quedó privada de ese apoyo económico, viéndose afectada en su subsistencia y la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas; **resultando procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia en cuanto declaró que la señora Alba Doriela Montoya de Chavariaga tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes**; condenando a COLFONDOS S.A. a reconocerle y pagarle dicha prestación.

Analizando la dependencia económica del señor José Ulises Chavarriaga Ceballos respecto del causante, se tiene

que mensualmente percibe una pensión; de acuerdo con la copia del recibo de pago del 3 de octubre de 2017, **la mesada para esa anualidad era de \$1.120.608 más \$103.280 por concepto de incrementos, para un total de \$1.223.888**, valor al cual, se le aplica descuento de \$134.500 para aportes a salud y \$282.703 por préstamo del Banco Popular, dando como resultado un total neto a pagar de \$806.685 (folio 49 archivo 01); lo anterior quiere decir que del monto que finalmente recibía no tenía que destinar recursos para el préstamo bancario en tanto ya le era descontado de manera automática. Con la demanda se adjunta copia de una letra de cambio fechada el 17 de abril de 2017, en la que el señor José Ulises se obliga a pagar a la orden de Cesar Castañeda \$10.000.000; sin embargo, tal documento no permite desentrañar la causa u origen de la obligación, que obedeciera a un préstamo para realizar mejoras en la casa, ni mucho menos que el causante le ayudara a su padre para el pago específico de dicho título valor. Considerando entonces que el señor José Ulises percibe una asignación mensual, que vive en casa propia, que con la pensión reconocida tiene garantizado el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tiene capacidad de beneficiarse de préstamos por parte de entidades financieras o particulares, y que se dividía los gastos del hogar con su hijo, lo que concluye esta judicatura es que para la fecha del fallecimiento del causante, tenía la capacidad y los recursos económicos para asumir su propia manutención y sostenimiento, sin estar subordinado a los aportes que su hijo daba para el hogar; **debiéndose absolver a COLFONDOS S.A., de reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes.**

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios, que han de analizarse únicamente a favor de la demandante Alba Doriela Montoya de Chavarriaga, esta Magistratura considera que la condena por este concepto resulta procedente

por cuanto COLFONDOS S.A. negó la pensión de sobrevivientes de manera injustificada, basándose en la investigación realizada por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., en la que se concluyó de manera equivocada la falta de dependencia económica de la demandante; pese a reconocer que el causante efectuaba un aporte económico para el hogar, infirió, sin tener elementos probatorios para ello, que se era destinado a solventar sus propios gastos y no lo del hogar en general, sin dar relevancia alguna al hecho de que señora Alba Doriela, aunque tiene el apoyo de su esposo, por si sola carece de renta, remuneración o ingreso económico alguno con el que pueda garantizar su propia manutención y vida en condiciones dignas; en contravía de lo señalado por la jurisprudencia de los Órganos de Cierre en las jurisdicciones Ordinaria Laboral y Constitucional, de público conocimiento para la entidad de seguridad social demandada.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **modificar** la decisión de Primera Instancia, en cuanto declaró que a los codemandantes les asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, condenando a reconocer y pagar en proporción del 50% para cada uno, la pensión de sobrevivientes a partir del 1° de julio de 2017 en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente cuyo retroactivo causado hasta el 31 de agosto de 2021 es de \$44.765.320 dividiéndose en partes iguales para cada uno y ordenó continuar pagando la prestación a partir del 1° de septiembre de 2021; en su lugar, **se absolverá a COLFONDOS S.A. del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes pretendida por José Ulises Chavarriaga Ceballos, declarándose que a la señora Alba Doriela Montoya de Chavarriaga le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes en un 100% a partir del 1° de julio de 2017, con derecho a 13 mesadas al año, adeudándosele por concepto de retroactivo pensional, la suma de \$44.765.320**

causado desde el 1° de julio de 2017 al 31 de agosto de 2021; a partir del 1° de septiembre de 2021 COLFONDOS S.A. deberá continuar reconociendo y pagando la pensión de sobrevivientes a la señora Alba Doriela Montoya de Chavarriaga en el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente.

Así mismo, se **modificará** la condena a intereses moratorios a favor de los demandantes; **en su lugar, se condenará a al pago de los mismos, en un 100% a favor de la señora ALBA DORIELA MONTOYA DE CHAVARRIAGA.**

COSTAS:

En la Sentencia de Primera Instancia, el *a quo* impuso costas a cargo de COLFONDOS, fijando como agencias en derecho la suma de \$3.500.000, sin discriminar si eran para cada uno de los demandantes o si dicha suma debería ser dividida por partes iguales; razón por la cual, no efectuará modificación al respecto.

En esta Segunda Instancia no se condenará en costas, al haber prosperado parcialmente el recurso de Apelación presentado por la apoderada de COLFONDOS S.A., de conformidad con lo establecido en los art. 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL,**

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **MODIFICA**, la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa, en proceso ordinario laboral donde son demandantes **ALBA DORIELA MONTOYA DE CHAVARRIAGA** y **JOSÉ ULISES CHAVARRIAGA CEBALLOS**, siendo demandada **COLFONDOS S.A.**; en cuanto declaró que a los codemandantes les asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, condenando a reconocer y pagar dicha prestación en proporción del 50% para cada uno; en su lugar, se **ABSUELVE** a **COLFONDOS S.A. de reconocer y pagar de la pensión de sobrevivientes pretendida por José Ulises Chavarriaga Ceballos; se DECLARA** que a la señora Alba Doriela Montoya de Chavarriaga le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, causada por el fallecimiento de su hijo Juan David Chavarriaga Montoya, en un 100%, a partir del 1° de julio de 2017, con derecho a 13 mesadas al año; adeudándosele por concepto de retroactivo pensional, la suma de \$44.765.320 causado desde el 1° de julio de 2017 al 31 de agosto de 2021; a partir del 1° de septiembre de 2021 COLFONDOS S.A. deberá continuar reconociendo y pagando la pensión de sobrevivientes a la señora Alba Doriela Montoya de Chavarriaga en el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se **MODIFICA** la condena a los intereses **moratorios** en cuanto condenó al pago de los mismos a favor de los demandantes; en su lugar, se **CONDENA a su pago a favor de**

la señora ALBA DORIELA MONTOYA DE CHAVARRIAGA en un 100%; según lo expuesto en las consideraciones.

TERCERO: No se CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia, según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL**

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandantes : **ALBA DORIELA MONTOYA DE CHAVARRIAGA y
JOSÉ ULISES CHAVARRIAGA CEBALLOS**
Demandada : **COLFONDOS S.A.**
Radicado : **05001 31 05 014 2017 00920 01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social – Pensión de Sobrevivientes causada por muerte de hijo.
Decisión : Modifica decisión condenatoria
Sentencia No : 010

FECHA SENTENCIA:

09 de marzo de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy martes 14 de marzo de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy martes 14 de marzo de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario